

MEMORIA FINAL DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

Expte.: 15/2025

Rª.: ACD/LGV/EMS/rmg/emg

Asunto: Anteproyecto de Ley de medidas hacendísticas, presupuestarias, tributarias y administrativas.

ANTECEDENTES.

El objeto de esta memoria es la motivación y justificación de las medidas de carácter legislativo que se introducen en el texto normativo de la Ley de medidas hacendísticas, presupuestarias, tributarias y administrativas y cuya exigibilidad deriva de los artículos 45 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e incompatibilidades de sus miembros, y 34.2 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. La Ley de medidas hacendísticas, presupuestarias, tributarias y administrativas incorpora diferentes modificaciones normativas propuestas por las respectivas Consejerías en función de la materia de que se trate.

El artículo 34 de la Ley 4/2005, y concretamente su apartado 2, determina que la elaboración de proyectos de disposición general implica la elaboración de un borrador inicial que irá acompañado por una memoria justificativa. Es por ello que las memorias correspondientes a cada una de las medidas, elaboradas por los respectivos órganos proponentes o unidades administrativas dependientes de los mismos, se incorporan como anexos a esta memoria general para justificar la adecuación, oportunidad y coste de las mismas. Adicionalmente, las medidas propuestas llevan ya practicados en origen los trámites sectoriales correspondientes –como su negociación colectiva o el sometimiento a órganos de participación o de representación–.

Se han numerado todas las memorias correlativamente en el expediente electrónico según el lugar que ocupa cada una de tales medidas en el texto de la Ley. De ese modo, se puede ir siguiendo el orden del texto con las memorias y la documentación complementaria que lo justifican.

En cualquier caso, al efecto de facilitar la tarea de los órganos informantes, y la posterior labor de tramitación reglamentaria en el Parlamento, se incluye a continuación un pequeño resumen de todas las medidas y de las razones que han motivado su inclusión, si bien la información completa se encuentra en cada memoria específica, a la que nos remitimos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00880-2025/000364	Informe	Consejo de Gobierno		2025/0459552
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1	Secretario General Técnico			
2				

JUSTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES MEDIDAS.

1) Título I. Medidas hacendísticas.

La Ley comienza con la modificación de los artículos 84, 87 y 89 de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja, todos ellos recogidos en el Título III dedicado a la gestión de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En el artículo 84 se incluye un nuevo apartado 4, para establecer un procedimiento que, con la finalidad de asegurar una gestión eficiente, evite tensiones de tesorería. Este nuevo apartado faculta a la Dirección con competencias en materia de Tesorería a realizar la retención de pagos a las entidades de sector público, con independencia de que los recursos financieros de la entidad no integran la Tesorería de la Comunidad Autónoma (que se limita a la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus organismos autónomos).

Las leyes de presupuestos anuales contemplan la sujeción de los libramientos de las transferencias nominativas al sector público de la C.A. de La Rioja se sujetan a los planes de disposición de fondos de la DG de Control Presupuestaria. Esta propuesta de modificación pretende su regulación en la Ley de Hacienda con un carácter de mayor permanencia.

Se pretende una visión ampliada de la Tesorería que permita, que siempre y cuando las entidades del sector público de la C.A. de La Rioja dispongan de suficientes disponibilidades líquidas y no resulten necesarias para el ejercicio de su actividad presupuestada, no existan ineficiencias que obliguen acudir al mercado financiero innecesariamente.

Esta medida es distinta de la ya prevista en el artículo 49 de la misma Ley, que contempla la posibilidad de declarar no disponibles los créditos de transferencias corrientes y de capital de las entidades del sector público, mientras que la modificación propuesta no actúa sobre los créditos sino sobre las propuestas de pago, por tanto, se refiere a distinta fase de la ejecución presupuestaria.

La actuación propuesta no interfiere el ejercicio de las competencias financieras o de tesorería que tienen atribuidas las entidades del sector público.

La modificación del artículo 87, relativo a los medios de pago e ingreso, recoge esencialmente la domiciliación bancaria para todos los ingresos. Para el caso de los ingresos tributarios el reglamento de recaudación permite supletoriamente la domiciliación, si bien quedaba sin regular esta posibilidad para los no tributarios. Se pretende ampliar las formas de realizar los ingresos a favor de la Tesorería, en los mismos términos.

El Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece, entre otras materias, los posibles medios de pago de las deudas tributarias y no tributarias, incluyendo expresamente entre tales medios a la domiciliación bancaria, si bien, en apartado 2 del artículo 34, para las deudas no tributarias remite a los

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 2 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2025/000364	Informe	Consejo de Gobierno	2025/0459552
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Secretario General Técnico		
2			

medios que autorice su propia normativa, y si no se hubiera dispuesto regla especial, excluye como medios de pago de las deudas la tarjeta de crédito y débito, la transferencia bancaria y la domiciliación bancaria.

Se regulan los medios de pago e ingreso en apartados diferenciados, para lo cual se incluye un nuevo apartado 2 para los ingresos, que sustituye el anterior apartado 2.

Se incluye también dentro del apartado 1 al igual que con los ingresos la posibilidad de la domiciliación de pagos. Si bien la exigencia de existencia de crédito adecuado y suficiente limita las posibilidades de la domiciliación, establecer, de manera limitada, la domiciliación para, por ejemplo, supuestos en los que la administración regional es sujeto pasivo de determinados tributos periódicos generaría eficiencias en la tramitación.

El desarrollo de esta apartado se llevará a cabo conjuntamente con la Intervención General, al tener su regulación un efecto directo sobre el principio de especificidad de los créditos presupuestarios y la ejecución de gastos.

La modificación del artículo 87 incluye también un nuevo apartado 3, por el que se establece una habilitación al Consejero con competencias en materia de hacienda para obligar a un determinado medio de ingreso o pago.

El cambio que afecta al artículo 89, sobre operaciones para facilitar la gestión de la Tesorería, incorpora un nuevo apartado 2, desplazando el antiguo apartado 2 al apartado 3, y que actúa como espejo a la medida incorporada al artículo 84.

En el artículo 84 se ha previsto la posibilidad de retener pagos desde la tesorería general a entidades del sector público, pero en determinados casos la situación es la contraria, las entidades tienen problemas de tesorería para atender sus pagos que no pueden esperar a los pagos presupuestarios periódicos.

Se establece la posibilidad de establecer operaciones no presupuestarias temporales, reintegrables en el ejercicio presupuestario de concesión, con el fin de facilitar la liquidez de la entidad. Al cierre de ejercicio presupuestario en el que se han concedido los anticipos los saldos no reintegrados tendrán la consideración de presupuestario, debiendo imputarse el capítulo 8 de los presupuestos.

El titular de la consejería con competencias en materia de Hacienda podrá autorizar la concesión de anticipos de caja a las entidades que forman parte integrante del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que tendrán la consideración de Operaciones No Presupuestarias y estarán limitadas en función del presupuesto de la entidad, si bien se faculta al Consejo de Gobierno a ampliar dicho límite.

Tal y como explica la memoria del centro gestor, las modificaciones están muy ligadas a la progresiva implantación del sistema de ingresos de la Comunidad Autónoma de La Rioja –GRIAR–, por lo que se considera su implantación resulta urgente, ya que posibilitaría también un desarrollo reglamentario más adecuado a la realidad económico financiera actual.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 3 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2025/000364	Informe	Consejo de Gobierno	2025/0459552
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

2) Título II. Medidas presupuestarias.

El segundo bloque de medidas se refiere a la Ley 5/2024, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2025.

La primera modificación suprime el artículo 10, para evitar el efecto de bloqueo de partidas presupuestarias en el caso de circunstancias imprevistas. Este artículo, que complementa a las limitaciones ya establecidas en el artículo 55 de la Ley de Hacienda Pública de La Rioja, contiene unas limitaciones inéditas en otras administraciones, y no están previstas en la Ley General Presupuestaria, por señalar la norma presupuestaria con más tradición.

Esas limitaciones, que llevaban años incorporadas a la Ley de Presupuestos, se han revelado contraproducentes y por tanto se considera conveniente su supresión con efectos de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2025.

La segunda modificación se refiere al artículo 23. La introducción de una enmienda para añadir nuevos apartados al artículo durante su tramitación parlamentaria provocó inadvertidamente que la redacción inicial que se había dado desde la DGCP se perdiera, por lo que a través de esta modificación se devuelve a ambos apartados la redacción inicial del proyecto de Ley enviado al Parlamento.

3) Título III. Medidas tributarias.

Las medidas tributarias se incorporan de urgencia por una incidencia surgida al comienzo de la campaña de IRPF 2024. Al comenzar la campaña, la AEAT ha considerado que la deducción autonómica riojana por adquisición de vehículos eléctricos, no está suficientemente clara y entra en colisión con la posterior norma estatal con deducciones sobre la misma materia.

Ya se había dictado una norma autonómica aclaratoria para solucionar dicha situación, que además había sido sometida a la consideración de la Secretaría Técnica Permanente del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, la cual no hizo observación relativa a la misma en su informe emitido el 30 de octubre de 2023.

No obstante, la solución más rápida y más directa para que los ciudadanos puedan aplicarse la deducción en los supuestos no afectados por la incompatibilidad entre las deducciones autonómica y estatal es introducir una modificación en la Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos, que ya ha sido pactada con la Administración estatal. Tras esta modificación, la AEAT habilitará las correspondientes opciones en el servicio Renta Web, de tal forma que, con una simple autoliquidación rectificativa, que importa todos los datos de las autoliquidaciones ya presentadas, pueda aplicarse la deducción dentro de ejercicio 2025 de forma fácil.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 4 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00880-2025/000364	Informe	Consejo de Gobierno		2025/0459552
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1	Secretario General Técnico			
2				

La petición imprevista de inclusión de esta medida, sin duda urgente y sin duda justificada, ha llevado a una modificación del título de la Ley en relación con la resolución de inicio, añadiendo la palabra “tributarias” a su rúbrica.

4) Título IV. Capítulo I.

Este capítulo abre el título dedicado a las medidas administrativas con una modificación de las normas de organización del sector público.

La Ley 9/2023, de 5 de mayo, de función pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ha previsto la existencia de una nueva figura de personal, el directivo público profesional, cuyo encaje dentro de la organización pública requiere cierto desarrollo.

En el caso de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, es necesario determinar dónde encontraría su papel esta nueva figura, diferenciarlo de otros directivos ya existentes para evitar confusiones, y revisar todas las remisiones internas para acotar las similitudes a lo que la norma pretendía inicialmente, sin que se mezcle el régimen jurídico y retributivo aplicable a diferentes figuras.

5) Título IV. Capítulo II.

Se ha revisado la regulación actualmente vigente de la figura del directivo público profesional en la Ley de función pública, en paralelo a la revisión de la Ley 3/2003.

Las modificaciones propuestas tratan de delimitar con mayor precisión el ámbito subjetivo de aplicación de la regulación del personal directivo público profesional, así como sus límites retributivos y la forma de determinar los puestos de trabajo de naturaleza directiva pública profesional.

6) Título IV. Capítulo III.

La aplicación práctica de la Ley 1/2025, de 28 de febrero, de Medidas Urgentes para el acceso a la vivienda, requiere una mejora normativa, consistente en la supresión de dos intervenciones del órgano autonómico competente en vivienda, en la fase del informe previo de habitabilidad y en la fase final de obra, lo que permitirá la agilización y simplificación perseguida por el Gobierno de La Rioja.

La modificación propuesta corrige la redacción dada en la Ley 1/2025, de 28 de febrero, suprime su disposición transitoria y añade una disposición transitoria al anteproyecto en tramitación para que la eliminación de las dos fases de habitabilidad se aplique de forma inmediata a todos los expedientes que se encuentren también en tramitación, provocando el cierre inmediato de todos los expedientes vivos y sin resolver.

7) Título IV. Capítulo IV.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 5 / 15
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2025/000364	Informe	Consejo de Gobierno	2025/0459552
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Secretario General Técnico		
2			

Durante el compás de espera forzoso hasta que las Cortes Generales aprueben la nueva legislación general sobre el suelo, se procede a realizar ajustes puntuales urgentes en la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, centrada en dos artículos y la disposición transitoria.

En relación con el artículo 28, durante los años de vigencia de la Directriz de Protección de Suelo no Urbanizable se han detectado diversos casos en los que la delimitación de los espacios de la Directriz no se ciñe a la realidad existente. Esto ha frenado muchas iniciativas constructivas, ya que la revisión del planeamiento –única opción prevista por la legislación– ha demostrado ser un instrumento excesivamente complejo y dilatado en el tiempo. Los ayuntamientos, en determinados supuestos, requieren medidas mucho más ágiles para poner suelo en el mercado susceptible de edificación y es, por ello, por lo que se propone la modificación del artículo 28, permitiendo que bajo determinados supuestos dicha adaptación puede acometerse mediante una modificación del planeamiento. Esto beneficiará especialmente a los pequeños municipios.

El artículo 136, relativo a la tramitación de los estatutos y bases de la Junta de Compensación, ha previsto una reducción de plazos que afecte a los pasos necesarios para su desarrollo, para poder disponer de suelo urbanizado en el menor tiempo posible. La modificación propuesta reducirá el plazo para que la administración municipal decida sobre la aprobación.

Finalmente, la modificación del derecho transitorio La obligación de revisar y adaptar el planeamiento conlleva muchas veces la paralización de la construcción de nuevas promociones en pequeños municipios, por lo que se propone retrasar la obligación de adaptación de los planeamientos generales para que dichos municipios cuenten con tiempo suficiente para llevar a cabo dicha revisión. Esta medida facilitará la construcción de pequeñas promociones en pequeños municipios. Se pretende extender la obligación de adaptación hasta el año 2030.

8) Título IV. Capítulo V.

Este capítulo, de medidas administrativas en materia de servicios sociales, modifica dos leyes, la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja, y la Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja.

La modificación de la Ley de Servicios Sociales tiene como finalidad dar cobertura legal a la creación de un instrumento que integre todos los sistemas de información existentes del Sistema Riojano de Servicios Sociales para la Historia Social Única. De este modo, sin perjuicio del posterior desarrollo reglamentario, se recoge el derecho de las personas usuarias del Sistema Público de Servicios Sociales a disponer de una Historia Social Única Electrónica de Servicios Sociales (HSUE), y se modifican los artículos 8, 11, 13, 29, 56 y disposición adicional tercera, de forma que la nueva figura reciba el correspondiente amparo normativo. La medida se ha enviado sin la contestación de la Dirección General de Servicios Sociales al informe de su delegada de protección de datos, con el compromiso de hacerla llegar durante la tramitación de la medida. Al resultar coincidentes las observaciones del Servicio de Organización, Innovación y Evaluación de los

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 6 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2025/000364	Informe	Consejo de Gobierno	2025/0459552
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

Servicios Públicos con las de la DPD, se han contestado conjuntamente todas las observaciones de ambos órganos, lo que se ha documentado más adelante en esta memoria, al analizar el informe del SOIESP.

La modificación de la Ley reguladora de la renta de ciudadanía tiene como finalidad su extensión a ciertos colectivos, o hacer su tramitación más sencilla. Así, se suaviza el requisito de edad para permitir el acceso a la renta de ciudadanía a mujeres víctimas de violencia de género desde los 16 años. Adicionalmente, se facilitará el acceso inmediato de los menores tutelados del Gobierno de La Rioja a la renta de ciudadanía en el momento en que alcanzan la mayoría de edad, con carácter previo a la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

9) Título IV. Capítulo VI.

Las medidas administrativas en materia de salud atienden a una demanda social en aumentar la protección del personal sanitario, endureciendo el régimen sancionador administrativo de la Ley 2/2002, de 17 de abril, de salud de La Rioja, para extenderlo a los agresores.

Se trata por tanto de perseguir el castigo del agresor desde la propia Administración Sanitaria, tipificando así las infracciones y sus correspondientes sanciones, buscando un complemento a la actual vía penal cuando la conducta no sea susceptible de sanción penal e intentando de este modo lograr sanciones efectivas ajustadas a la gravedad de los hechos.

Se han corregido de oficio algunos errores formales que contenía la propuesta del SERIS desde esta SGT de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, como la sustitución indeseada del verbo “sancionar” por “solucionar” en el último párrafo del artículo 112.7.

10) Título IV. Capítulo VII.

La modificación de la Ley 5/2010, de 14 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de La Rioja, tiene tres finalidades: mejorar la redacción de las funciones asignadas a los Auxiliares de Policía Local, que por su redacción limitativa ha causado algunos problemas, y adaptar dos requisitos a la jurisprudencia –los límites de estatura para acceder- y al número de años de permanencia establecido por la mayoría de administraciones autonómicas para acceder a la permuta –igualando el número de años de permanencia-.

11) Título IV. Capítulo VIII.

La siguiente medida incluye una tramitación abreviada para las adendas a convenios a través de los que se ejecuten fondos europeos, al efecto de ahorrar informes cuando se trate simplemente de trasladar al convenio la ampliación de plazos de ejecución y justificación en la programación europea, o bien cuando haya simples cambios en las actuaciones financiadas, incluyendo reajuste entre ellas, siempre y cuando no supongan en ningún caso un cambio en el objeto del convenio.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 7 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2025/000364	Informe	Consejo de Gobierno	2025/0459552
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Secretario General Técnico		
2			

El cumplimiento de estos límites debe plasmarse expresamente en la memoria correspondiente de cada SGT, previo informe del centro gestor.

Se ha suprimido de la propuesta de la Dirección General, en su incorporación al texto del anteproyecto, la expresión “*u otras circunstancias debidamente motivadas*”, en vista de que la absoluta excepcionalidad de la medida contemplada solo se puede entender justificada por la adaptación a cambios en la programación europea, y no puede quedar abierta a cualquier apreciación de si concurre o no concurre una “circunstancia debidamente motivada”, por otra parte nada acotada, lo que daría serios problemas interpretativos en la práctica.

12) Disposiciones de cierre: transitorias, derogatoria y final.

La disposición transitoria única, como se ha indicado ya, trae causa de las modificaciones en materia de vivienda a los efectos de suprimir con carácter inmediato la cédula de habitabilidad. Esta disposición permitirá el cierre de aquellos expedientes todavía abiertos en la fecha de entrada en vigor de la Ley a los que sean de aplicación las disposiciones del capítulo III del Título IV de la presente ley.

La disposición derogatoria única contiene la fórmula de derogación genérica correspondiente.

La disposición final única señala la entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.

CONTENIDO ECONÓMICO.

Las medidas administrativas van acompañadas, cuando resulta procedente, de sus correspondientes memorias económicas, que establecen la justificación financiera o, en su caso, las previsiones estimativas referentes a los ingresos que se espera ingresar o dejar de percibir con respecto a la situación actual, y muestran cómo se han calculado las cuantías que se establecen.

Una de las medidas con gasto asociado de las contempladas en esta Ley es la creación de los programas necesarios para la puesta en marcha de la Historia Social Única, que precisa de la implantación y el desarrollo de una herramienta de información múltiple que integre la diversidad de instrumentos de información existentes en el Sistema Riojano de Servicios Sociales. No obstante, el gasto se produce como consecuencia de los correspondientes expedientes de contratación, que como señala la memoria se encuentran ya en trámite.

La extensión de la Renta de Ciudadanía tiene un coste previsto de 107.280 euros al año.

TRÁMITACIÓN.

Se considera preceptiva la emisión de los siguientes informes y dictámenes durante la tramitación de este Anteproyecto:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 8 / 15
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2025/000364	Informe	Consejo de Gobierno	2025/0459552
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Secretario General Técnico		
2			

1) Informe del Servicio de Organización e Innovación de los Servicios Públicos.

El Servicio debe emitir informe según el Decreto 125/2007, de 26 de octubre, por el que se regula el ejercicio de las funciones en materia de organización administrativa, calidad y evaluación de los servicios en la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Rioja y sus Organismos Autónomos, informando con carácter preceptivo toda disposición general que suponga la creación, modificación o extinción de órganos o de procedimientos, por lo cual su informe resulta preceptivo en relación con varios artículos de la norma proyectada. El SOIESP ha emitido informe con fecha 15 de mayo de 2025. Su informe contiene las siguientes observaciones:

a) En relación con la modificación de la Ley 2/2007, de 1 de marzo, de Vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el informe sugiere que sería adecuado introducir una coma en el apartado 1 del artículo 6, tras “rehabilitación integral”, y de indicar la conveniencia de hacer coincidir la expresión “resolución de calificación definitiva” del artículo 6.2, más acorde con la realidad administrativa, y la utilizada, a estos efectos, en el artículo 3.8 de esta misma ley que habla, concretamente, de “cédula de calificación definitiva”, por lo que se sugiere la modificación de ésta última. Por su parte, también como cuestión menor se propone modificar el título de la disposición adicional tercera, sustituyendo en el mismo la expresión “supresión” por “inaplicación”.

Se ha practicado una consulta informal con la consejería proponente, que acepta el cambio en cuanto se refiere a la puntuación –la coma- y propone como compromiso transaccional la modificación del apartado 2 del artículo 6, para sustituir la expresión “resolución de calificación definitiva” por “calificación definitiva”. Ambos cambios se han incorporado al texto.

La Consejería no ha aceptado el cambio propuesto en el 6.2 en los estrictos términos propuestos en el informe del SOIESP por las siguientes razones: En la Ley 2/2007, de 1 de marzo, de Vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja se utiliza el término Calificación Definitiva en 27 ocasiones. En 20 de los casos se usa sólo el término “Calificación Definitiva” y en las 7 restantes “Cédula de Calificación Definitiva”. Eliminar este término, por tanto, supondría modificar no sólo el artículo 3.8 de la ley de Vivienda, sino también su exposición de motivos y sus artículos 13.1 b, 25d, 48.6, 74.9 y 75.10. La Consejería entiende que esta Ley de medidas no es el momento de realizar esta modificación con el objeto de unificar términos que son lo mismo, y coincidimos en que su propuesta alternativa resulta más adecuada.

En cuanto al último cambio sugerido, la consejería lo rechaza porque la diferencia entre supresión e inaplicación radica en la causa y el efecto de la acción. La supresión implica la eliminación definitiva de algo, mientras que la inaplicación se refiere a la negación temporal de su aplicación o efecto. La intención del legislador es la eliminación definitiva y no sólo de forma temporal. Por lo que se considera más adecuado el uso del término “supresión”.

b) En relación con la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, el SOIESP sugiere tres cambios puntuales.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 9 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2025/000364	Informe	Consejo de Gobierno	2025/0459552
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

Además de mediante la redacción por primera vez del planeamiento y de la revisión del planeamiento existente, según se establece actualmente en la Directriz de protección de suelo no urbanizable de La Rioja, puede llevarse a cabo este reajuste mediante la modificación del mismo. El informe plantea valorar eliminar la restricción de que pueda llevarse a cabo por una sola vez, para garantizar, aún más, siempre que sea posible, la medida de flexibilización propuesta y evitar posibles confusiones en cuanto a la procedencia de su utilización. Por otro lado, la Ley establece una reducción de plazos de tres a dos meses, que se valora de forma muy positiva, en las fases de tramitación de los estatutos y bases de la Junta de Compensación, sin perjuicio de señalar que, tal vez por error, se ha mantenido en el apartado 3 del artículo 136 el plazo inicial de tres meses, por lo que se propone su sustitución por el plazo reducido de dos meses. Finalmente, el SOIESP propone unificar en un solo apartado la modificación propuesta en los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria primera, al objeto de ampliar el plazo de adaptación a la ley hasta la finalización del año 2030, puesto que no existe ninguna causa que motive dicha diferenciación.

Evacuada consulta informal con la consejería proponente, se ha aceptado la primera de las observaciones, que se ha incorporado al texto, y se han rechazado las dos observaciones restantes por las razones que se exponen a continuación.

En relación a la modificación del artículo 28, mantener la restricción de “una sola vez” para la adaptación de los límites de la DPSNUR, es cuestionable porque aporta rigidez a la flexibilidad propuesta, toda vez que si la realidad futura de algún límite municipal con la DPSNUR resulta disconforme con los valores que protege el área de ordenación concreta, ya no cabrá el reajuste por Modificación Puntual de planeamiento, sino por revisión del mismo, con el encorsetamiento que ello irrogaría a la flexibilización, eficiencia y al ahorro de tiempos de gestión administrativos.

En cuanto a la modificación del artículo 136, la consejería indica que no se trata de un error y que se ha decidido mantener el plazo citado. No estamos ante plazos coincidentes sino diferentes. El primero se refiere a la aprobación inicial y el segundo al de la comunicación de la aprobación inicial por lo el centro gestor considera razonable que el segundo plazo sea más amplio que el primero. La consejería proponente se ratifica, pues, en dos meses de plazo para la aprobación inicial y tres meses de plazo para la comunicación de la aprobación inicial y actuación de la COTUR por subrogación.

Finalmente, en cuanto a la disposición transitoria primera, se utiliza la misma estructura y división en apartados que la de la ley en vigor. Su consideración alteraría la nomenclatura de todos los apartados y creen conveniente el mantenimiento en dos apartados.

c) Modificación de la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja.

El SOIESP señala la existencia, a su juicio, de un error en la base de legitimación descrita en el apartado 2 de la disposición final tercera para el tratamiento de los datos necesarios para la gestión de los servicios del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales, que se basaría en el consentimiento de las personas usuarias. A su juicio, sería más acorde con la realidad fundamentarlo en el cumplimiento de las obligaciones legales del responsable del tratamiento.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 10 / 15
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2025/000364	Informe	Consejo de Gobierno	2025/0459552
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

En la misma línea, también considera que está mal descrito el posible acceso del personal en el apartado 5 de esa misma disposición final, y que debe eliminarse la referencia a la cesión y comunicación de datos, puesto que no se trata de uno de dichos supuestos.

En el caso concreto de estas observaciones, resultan coincidentes con las que contiene el informe de la Delegada de Protección de Datos incorporado al expediente, aunque éste también contiene algunas objeciones adicionales que la Dirección General de Servicios Sociales todavía no había contestado.

Se ha evacuado también consulta informal, como con el resto de centros gestores, al efecto de que la consejería contestara a las observaciones pendientes, tanto a las de su DPD como a las del SOIESP. Recibida su contestación, ésta implica una serie de cambios motivados, que se han trasladado al texto de la Ley, y el rechazo de algunas observaciones, también de forma motivada. Se expone brevemente, a continuación, el sentido de la consulta en relación con las observaciones de DPD y SOIESP.

1. En la nueva redacción de la letra g) *“Derecho a la confidencialidad de todos los datos en informaciones que consten en su expediente administrativo y en la Historia Social Única Electrónica de Servicios Sociales (...)”* la DPD sugiere añadir *“por parte de los profesionales de los servicios sociales”*. Tal y como indica el propio informe, este derecho a la confidencialidad de las personas usuarias se configura como deber de respeto por parte personal profesional de los servicios sociales en el artículo 11.d) de la ley, por lo que no se considera necesario añadir esta precisión respecto al deber de confidencialidad en el derecho reconocido en la nueva letra g).
2. El informe de la DPD propone que se valore incluir el derecho a información de las personas usuarias sin perjuicio de la regulación reglamentaria posterior a que hace referencia el artículo 56, nuevo apartado 3 in fine, respecto al contenido y la gestión de la Historia Social Única Electrónica (HSUE). LA DGSS considera adecuado añadir una nueva letra ñ) al artículo 8, que incluya el reconocimiento del derecho a información en materia de datos personales y que a la vez remita a la normativa vigente en esta materia, sin perjuicio de un posterior desarrollo reglamentario en lo que respecta a la HSUE, con la siguiente redacción: *“Derecho a recibir información clara y accesible sobre el tratamiento de los datos personales de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en esta materia”*. Se ha añadido ese nuevo apartado.
3. En coherencia con la modificación anterior, y con el objeto de dejar claro la existencia de un posterior desarrollo reglamentario en materia de protección de datos personales respecto de la HSUE, además de lo ya dispuesto en el artículo 56.3 in fine *“(…) Su contenido y gestión se regulará mediante desarrollo reglamentario”* se añade, en el nuevo apartado cuatro de la disposición adicional tercera, relativo a la normativa aplicable al tratamiento de los datos personales de la HSUE, la sujeción también, en lo que respecta a derechos y deberes en materia de protección de datos personales, a lo dispuesto mediante el correspondiente desarrollo reglamentario.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 11 / 15
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2025/000364	Informe	Consejo de Gobierno	2025/0459552
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

4. La DPD se refiere también a la protección del derecho a la intimidad de terceras personas en el acceso al expediente personal y a la HSUE. Según el informe de la DPD, no se entiende esta protección si en el expediente al cual accede la persona usuaria, únicamente constan datos de la propia persona que accede al mismo. Este límite ya se regulaba en la ley respecto al derecho de acceso el expediente y se añade ahora en relación al acceso a la HSUE. La DGSS considera necesaria su regulación por ejemplo para el caso de acceso a la HSUE por la persona representante legal y respecto a la información privada que afecte a familiares de la persona titular del derecho de acceso.

5. Respecto al artículo 11 “Deberes de los profesionales de los servicios sociales” el informe de la DPD sugiere añadir dos nuevos apartados: 1) El deber de acceso única y exclusivamente a los datos necesarios para el ejercicio de sus funciones y 2) El deber de información a las personas usuarias sobre la forma de gestionar sus datos personales y los derechos a ejercer en relación a los mismos. Este artículo recoge los deberes del personal profesional de los servicios sociales de forma general, sin hacer mención a la HSUE. No obstante, dada la ausente regulación de principios de protección datos personales en la ley, se entiende acertado añadir el deber de acceso única y exclusivamente a los datos necesarios para el ejercicio de sus funciones, el cual por coherencia con el resto del artículo se inserta como nueva letra e), a continuación del deber relativo al respeto a la intimidad y a la garantía de la confidencialidad recogido en la letra d), dando lugar a la reenumeración de las restantes letras. Se ha añadido este cambio en la Ley. Respecto al segundo deber, relativo a la información a las personas usuarias sobre el tratamiento de los datos personales y los derechos a ejercer en relación a los mismos, teniendo en cuenta que la normativa de protección de datos personales regula este deber, que el artículo 8 reconoce el derecho a la información con la introducción de la nueva letra ñ) y que tanto dicho artículo como el apartado 4 de la disposición adicional tercera remiten a un posterior desarrollo reglamentario, se considera que se puede prescindir de su regulación en este artículo 11.

6. El informe de la DPD sugiere añadir una referencia a la garantía de acceso a la HSUE únicamente por personal profesional del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales con garantías de autenticación y registro de actividad. El nuevo apartado 4 letra b) del artículo 56 hace referencia al acceso a la HSUE por parte del personal profesional del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales habilitado para ello, en los términos previstos reglamentariamente; el nuevo deber de la letra e) del artículo 11 se refiere al acceso única y exclusivamente a los datos de las personas usuarias que, por razones profesionales, sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones; y el nuevo apartado cinco de la disposición adicional tercera recoge la autorización de comunicación y cesión de datos personales para su consulta por el personal profesional del referido sistema público siempre que dicho acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones, y añadiendo como se indica posteriormente (punto D del presente informe) las garantías de confidencialidad y seguridad. La DGSS considera que solo queda pendiente mejorar la redacción de la letra b) del nuevo apartado 4 del artículo 56, para precisar que el acceso por parte del personal profesional habilitado, lo es por este personal “únicamente” y que ha de serlo “con garantías de autenticación y registro de actividad”. Se ha trasladado esta modificación al texto de la norma.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 12 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2025/000364	Informe	Consejo de Gobierno	2025/0459552
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

7. El Informe de la DPD sugiere una nueva redacción de la letra e) del nuevo apartado 4 del artículo 53, la cual se incorpora por ser más completa. Asimismo, atendiendo a la consideración del Servicio de Organización, Innovación y Evaluación de los Servicios Públicos, se precisa en este apartado y letra, la interoperabilidad para permitir esta con otras áreas de la política social del Gobierno de La Rioja y con otras Administraciones Públicas. Se ha trasladado la nueva redacción del artículo 53.4.e a la Ley.
8. En relación con la disposición adicional tercera, y las distintas observaciones al respecto, la DGSS ha efectuado las siguientes consideraciones. En relación con el informe del Servicio de Organización, Innovación y Evaluación de los Servicios Públicos sobre el apartado 2 de la disposición adicional tercera, se atiende a la misma y con ocasión de tal cambio se mejora la redacción. Respecto al nuevo apartado 5 el informe de la DPD sugiere otra redacción más completa que ahora se añade. Además se añade, en cuanto a las observaciones del Servicio de Organización, Innovación y Evaluación de los Servicios Públicos, la redacción sugerida sustituyendo los términos “comunicación” y “cesión” por “acceso” y se mejora la redacción. En relación al apartado 6, se mantiene la misma redacción, al entender que la HSUE implica a diferentes servicios, órganos y organismos de la Consejería. Los cambios se han incorporado a la Ley.
9. Finalmente, se contestan algunas apreciaciones adicionales del informe de la DPD, que en su mayor parte solo se refieren a documentación interna o a actuaciones de la propia consejería en relación con el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos. Tan solo la última de estas cuestiones tiene reflejo normativo en lo que atañe a la tramitación de la presente Ley. La DPD sugiere establecer mecanismos de autenticación y verificación de la tarjeta de servicios sociales regulada en el artículo 56 “Sistema de Información de Servicios Sociales” apartado 2. La DGSS recuerda que la tarjeta de servicios sociales es única y transferible y para garantizar el único acceso a datos personales por su titular o representante, tal y como sugiere la DPD, se añade una remisión normativa al desarrollo reglamentario para establecer los mecanismos de autenticación y verificación de dicha tarjeta. Se ha trasladado esta modificación al apartado 2 del artículo 56.

Teniendo en cuenta que estas cuestiones no tienen repercusión presupuestaria, y que no suponen la creación, modificación o supresión de órganos ni de procedimientos, los cambios no requieren volver a enviar el texto a nuevos informes del SOIESP ni de la DGCP, pudiendo enviar ya el texto a informe de la DGSJ.

d) Observaciones formales en cuanto al lenguaje inclusivo.

El informe del SOIESP contiene varias sugerencias alternativas de redacción en diferentes artículos para sustituir algunos términos por otras expresiones más alambicadas que considera más inclusivas.

No se admite ninguna de tales sustituciones, por varias razones que van del orden gramatical al de técnica normativa.

En primer lugar el uso del masculino inclusivo es perfectamente respetuoso con la igualdad entre hombres y mujeres, en términos explicados por la Real Academia Española en una doctrina pacífica, de la que puede encontrarse una muestra

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 13 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2025/000364	Informe	Consejo de Gobierno	2025/0459552
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

representativa en el siguiente enlace: <https://www.rae.es/noticia/nota-de-la-real-academia-espanola-sobre-las-recomendaciones-para-un-uso-no-sexista-del>

En segundo lugar, introducir esta clase de expresiones en modificaciones muy puntuales de normas, que cambian únicamente algunos artículos pero que mantienen el masculino inclusivo en el resto de su redacción, dejaría la normativa consolidada sin concordancia en la denominación de los órganos, lo que parece sumamente desaconsejable desde el punto de vista de la claridad de la norma.

Finalmente, el uso de ese lenguaje forzado hace que las normas sean menos comprensibles desde el punto de vista del ciudadano, que no emplea en su día a día esa artificiosa forma de expresión, con largas perífrasis para sustituir simples sustantivos, e incluso desdoblamientos de artículos, sustantivos y adjetivos. En consecuencia, esta forma de expresión también es contraria a todas las recomendaciones e iniciativas sobre la simplificación del lenguaje administrativo para acercarlo al ciudadano, e incompatible con ellas.

2) Informe de la Dirección General de Control Presupuestario.

Su informe es preceptivo según lo dispuesto en el artículo 14 i) del Decreto 51/2023 de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

La DGCP ha emitido informe con fecha 15 de mayo de 2025, con las siguientes conclusiones:

“Esta DG entiende suficientemente motivada la tramitación del Anteproyecto de Ley de medidas hacendísticas, presupuestarias, tributarias y administrativas propuesto.

Esta DG estima que el impacto en términos de déficit y regla de gasto del Anteproyecto de Ley propuesto oscilará entre un mínimo de 107.280 euros anuales (en el supuesto de recibir financiación 100% MRR) y un máximo de 1.543.012 euros en 2025 y 234.638 euros en 2026 (en el supuesto de no recibir financiación MRR), y sin perjuicio del impacto derivado de la posible prórroga del contrato de HSUE, teniendo en cuenta que la financiación mediante fondos europeos MRR finaliza en el ejercicio 2026.

Es importante observar que en 2025 están activadas las reglas fiscales, y posiblemente continuarán en ejercicios futuros. En consecuencia, es necesario ser prudentes a la hora de adoptar decisiones que supongan incremento en el gasto público, y en especial, en gasto corriente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 14 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2025/000364	Informe	Consejo de Gobierno	2025/0459552
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Secretario General Técnico		
2			

Se entiende informado este expediente a efectos del artículo 14 i) del Decreto 51/2023 de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.”

3) La Dirección General de los Servicios Jurídicos debe informar el texto completo de la Ley, con carácter preceptivo y último en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de funcionamiento y régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y 12 del Decreto 21/2006, de 7 de abril, por el que se regula la organización y funcionamiento de la Dirección General de los Servicios Jurídicos. El informe ha sido emitido con fecha 20 de mayo de 2025, con carácter favorable al texto de la norma, y considerando que existe competencia estatutaria para aprobarla y que el procedimiento seguido por el anteproyecto ha seguido los trámites previstos en el ordenamiento jurídico.

En vista de todo lo anterior, y constando memorias e informes de los diferentes centros proponentes relativos a cada uno de los preceptos que integran este Anteproyecto de Ley, así como los respectivos trámites de audiencia corporativa y de sometimiento de las propuestas a los órganos participativos y consultivos previstos en normas sectoriales practicados desde cada consejería, esta Secretaría General Técnica informa favorablemente el presente proyecto normativo, y lo eleva para su aprobación y firma, y su ulterior remisión al Consejo de Gobierno para su aprobación como proyecto de Ley y su envío al Parlamento de La Rioja para su tramitación por la Cámara.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 15 / 15
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2025/000364	Informe	Consejo de Gobierno	2025/0459552
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			